

El INE en 2018-2022. Desempeño y ofensiva gubernamental en su contra.

Pablo Xavier Becerra Chávez

Ponencia para el XXXIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: América Latina y el Caribe, elecciones y virajes políticos.

Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, 2022.

Introducción

Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador (en adelante AMLO) su gobierno inició, ni más ni menos, la “Cuarta transformación de la vida nacional”, gracias a la cual se está construyendo una verdadera democracia, en la cual el pueblo por fin cumple el papel decisivo, guiado, por supuesto, por su liderazgo. En esta visión presidencial lo que teníamos hasta antes de su triunfo electoral no era democracia, sino apenas una tímida caricatura, opacada totalmente por la corrupción, la impunidad y el dominio de la mafia del poder, elementos propios del negro periodo del neoliberalismo. Las elecciones eran caras y se caracterizaban por el fraude electoral, con excepción por supuesto de la de 2018. En la visión presidencial es necesario reconstruir (o regenerar, como lo indica el nombre de su partido) todo.

Desde una perspectiva crítica, es posible detectar fuertes signos de una tendencia autoritaria en el presidente AMLO en los siguientes aspectos: a) la tendencia a pasar por encima de la ley para aplicar de inmediato sus decisiones, sin esperar a que se aprueben las reformas legales necesarias; b) una fuerte tentación presidencial de avasallar a los otros poderes y a los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE); c) una actitud intolerante hacia la oposición y la prensa crítica, a las cuales permanentemente ataca e insulta; d) una visión muy peculiar de las consultas a la ciudadanía, que las convierte en meros medios de ratificación de las decisiones presidenciales ya tomadas, pero que le permiten movilizar a sus simpatizantes; e) un uso muy peculiar de la política social, cuya finalidad es construir una leal clientela electoral, lo cual va unido a la aplicación de una drástica política de recortes al gasto público y de despidos, con el fin de obtener recursos para la política social, en una peculiar combinación que podemos llamar neoliberalismo populista; f) un elemento muy vinculado al anterior, el hecho de estar en permanente recorrido por todo el país, como si

estuviera en una permanente campaña electoral, con el uso reiterado de una retórica de confrontación y polarización; y, finalmente, g) un ambivalente manejo del tema de la reelección, en el cual insiste con frecuencia, permite que sus seguidores lo halaguen con la idea de reelegirse ante lo cual insiste que no buscará la reelección, a pesar de que la constitución lo prohíbe expresamente.

Desde las últimas semanas de la campaña electoral de 2018 se estableció una relación muy peculiar entre AMLO y el presidente saliente Peña Nieto. En su discurso de toma de posesión AMLO le agradeció a Peña Nieto que no haya obstaculizado su elección, omitiendo por completo el papel del INE en la organización de la elección. AMLO dijo: “Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones. Pero, sobre todo, le reconozco el hecho de no haber intervenido, como lo hicieron otros presidentes, en las pasadas elecciones presidenciales” (AMLO, 1/Dic/2018).

Efectivamente, el gobierno de EPN no atacó la campaña de AMLO, pero sí la del candidato de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, por medio de la Procuraduría General de la República, que infló un supuesto caso de lavado de dinero contra el candidato de la coalición PAN-PRD-MC. La prueba del manejo político de la PGR es que después de la elección dicho caso fue cerrado por falta de pruebas (El País, 5/Mzo/2019) y posteriormente el TEPJF resolvió que hubo un “uso parcial de recursos públicos por la PGR contra Ricardo Anaya” (SS-TEPJF, Boletín 15/May/2019). Evidentemente, AMLO aprovechó la situación. Para él fue una especie de venganza por lo que el gobierno de Fox hizo en su contra en 2005 con el juicio de desafuero, evidentemente orquestado por el presidente guanajuatense para impedirle ser candidato en 2006, lo que finalmente no logró.

Como corolario, en su discurso de toma de posesión AMLO insistió en que su gobierno acabará con la corrupción y la impunidad, pero al mismo tiempo estableció una política de “punto final”, que consiste en perdonar y no llevar a los tribunales a los corruptos del pasado. Planteó que la lucha contra la corrupción y la impunidad se aplica a su propio gobierno, pero no a los anteriores. Cuando mucho planteó que podría consultar al pueblo sobre la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes del periodo neoliberal (AMLO, 1/Dic/2018). En un principio estableció como fecha tentativa de tal consulta el 21 de marzo de 2019, pero después la olvidó. No fue sino hasta la víspera del inicio del proceso electoral 2020-2021 que resucitó

el tema de la consulta para tratar de empatarla con la jornada electoral del 6 de junio de 2021, como se verá más adelante.

Estos elementos permiten pensar que entre AMLO y Peña Nieto se produjo algo así como un pacto de impunidad, lo cual se fortalece con el hecho de que el presidente Peña Nieto desapareció de la escena pública tan pronto como se conoció el resultado de la elección, lo que le permitió a AMLO gobernar de facto desde el día siguiente a la jornada electoral, de tal forma que el primero de diciembre solamente se cumplió con el ritual formal de la toma de posesión, pero el poder presidencial ya llevaba cinco meses ejerciéndose desde la casa de campaña del virtual ganador.

El gobierno de AMLO desde el inicio contó con una cómoda mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, por medio de Morena, el PT y el PES (a pesar de la pérdida de registro de éste), y además logró consolidar una alianza con el PVEM (aliado del PRI en 2018) y absorbió a algunos legisladores escindidos del PRD, lo que le permitió alcanzar la mayoría calificada en la cámara de diputados pero no en la de senadores. De tal manera, el actual presidente tiene lo que varios de los presidentes del pasado inmediato no tuvieron: mayoría cómoda en el legislativo. Esto le ha permitido sacar adelante buena parte de su agenda de modificaciones legales sin mayor problema. Donde ha sufrido un poco es en las reformas constitucionales, particularmente en el senado, donde los partidos opositores han formado un “bloque de contención”.

Con esa mayoría en el legislativo, AMLO desarrolló una estrategia para controlar el poder judicial y a los organismos autónomos a lo largo de sus primeros dos años, lo que logró con éxito, por medio de una peculiar combinación de presiones y amenazas con negociaciones palaciegas.

Pero donde la estrategia presidencial se topó con una gran resistencia fue en el caso del INE, al que acusa permanentemente de organizar elecciones caras y poco confiables, de que sus funcionarios ganan más que el propio presidente, trasladando al nuevo instituto las acusaciones que en 2006 y 2012 lanzó contra el IFE, al que siempre culpó, sin pruebas, de los supuestos fraudes electorales con los que trató de explicar sus derrotas. Cuando el Consejo General del INE aprobó una multa al partido Morena por el fideicomiso para apoyar a los damnificados del terremoto (El Universal, 18/julio/2019), AMLO, entonces presidente

electo, acusó a sus consejeros de ser parte de sus adversarios, los conservadores, y que dicha sanción era una venganza por su triunfo. A partir de ese momento, el presidente ha aprovechado cualquier oportunidad para atacar al INE, lo que se agudizó durante el proceso electoral 2020-2021.

Existía cierta expectativa de que el partido del presidente desarrollara una reforma electoral que concretara esa hostilidad hacia el INE, pero eso no ocurrió. Si bien Morena y sus aliados presentaron muchas iniciativas de reforma electoral, no se advertía una visión de conjunto. Junto a los temas del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), un tema que le interesaba mucho a AMLO era el de la reducción del financiamiento público a los partidos, por lo menos a la mitad. Se llegó a integrar un dictamen que se discutió en la Cámara de Diputados, pero fue rechazado incluso por los aliados de Morena, PT y PVEM, porque como partidos pequeños evidentemente no les convenía ver reducido su financiamiento (Canal del Congreso, 12/Dic/2019).

En las iniciativas de reforma electoral presentadas por legisladores de Morena durante 2019, así como en declaraciones del vicecoordinador de los diputados de ese partido, Pablo Gómez (El Financiero, 17 junio, 2019; Proceso, 14 junio 2019), se proponían varias medidas para reformar al INE y los OPLEs, como la disminución del número de consejeros así como de sus sueldos, la desaparición o reestructuración de los organismos locales, llegando incluso a la desaparición de su Consejo General y de la estructura distrital permanente (en la propuesta del diputado Gómez). El argumento central de estas modificaciones era el de la austeridad, pero en el fondo se advertía el propósito del gobierno de controlar a los organismos electorales, aunque sin una idea clara y articulada. Sin embargo, a pesar de la abundancia de iniciativas de reforma, finalmente no se logró aprobar ninguna reforma sobre el INE y sus funciones antes del proceso electoral iniciado en septiembre de 2021 (un análisis de iniciativas en Becerra Chávez, 2019).

La elección de los nuevos consejeros del INE

Durante 2020 se desarrolló el proceso para el nombramiento de cuatro consejeros que debían sustituir a quienes fueron nombrados en 2014 para un periodo de seis años. Es necesario recordar que en abril de 2014, en la transformación del IFE en INE, para garantizar el nombramiento escalonado de los consejeros, fueron nombrados tres que estarían en el cargo tres años, cuatro para un periodo de seis años y los restantes cuatro (incluyendo al Consejero Presidente) para nueve años. Los nombramientos de 2014 y 2017 se llevaron a cabo en el contexto de una cámara de diputados, la instancia facultada para hacer el nombramiento, donde los tres principales grupos parlamentarios correspondían al PAN, el PRI y el PRD (Becerra Chávez, 2015; 212-214).

Dado el control de Morena y sus aliados en la Cámara era muy probable que los nombramientos (dos mujeres y dos hombres) recayeran en personas cercanas al partido gobernante. Se desarrolló el procedimiento previsto en la ley, que implica una convocatoria pública y evaluaciones por parte de un comité técnico. La cuarentena debida a la pandemia de Covid-19 suspendió el proceso por casi tres meses, por lo que finalmente la Cámara de Diputados completó el nombramiento de los cuatro consejeros el 22 de julio de 2020. Con esto se completaron los once integrantes del Consejo General del organismo encargado de organizar las elecciones federales y coadyuvar en las elecciones locales, apenas a cinco semanas de que iniciara el año electoral 2020-2021 (la información del proceso proviene del micrositio de la Cámara de Diputados <http://consejerosine2020.diputados.gob.mx/>).

A la convocatoria pública acudieron 390 aspirantes, 255 hombres y 135 mujeres, lo que implicó que por cada vacante se inscribieron casi cien aspirantes. Al mismo tiempo se formó un Comité Técnico de Evaluación (CTE) integrado por tres personalidades nombradas por la propia cámara, dos por el INAI y otras dos por la CNDH. El nombramiento más polémico fue el del académico norteamericano naturalizado mexicano John Ackerman, nombrado por la CNDH, no tanto por sus méritos académicos sino por su calidad de activista e ideólogo del partido Morena y su gran cercanía con el presidente López Obrador, a pesar de que en la convocatoria los grupos parlamentarios habían acordado que las personalidades no fueran cercanas y menos abiertamente militantes de algún partido. El nombramiento fue impugnado con el argumento de que Ackerman formaba parte de un órgano de dirección de Morena, la instancia de formación ideológica, pero el TEPJF resolvió que dicha instancia ni siquiera

existía en los Estatutos de ese partido y por tanto no había impedimento para que participara en el CTE.

Como parte del proceso se realizó un examen de conocimientos que permitió seleccionar a los 160 mejor calificados, a los que sumaron otros cuatro que solicitaron revisión de su examen. De éstos se seleccionó a 30 mujeres y 30 hombres, mediante una evaluación integral del examen, un ensayo, el CV y la exposición de motivos, pero el CTE no publicó las evaluaciones correspondientes. Esa situación se congeló durante los tres meses de suspensión de actividades debido a la pandemia. Ante la impugnación de varios aspirantes, el TEPJF resolvió que el CTE debía publicar las evaluaciones de las y los aprobados, así como de los impugnadores. Sin embargo, dichas evaluaciones no se publicaron desglosadas por cada uno de sus componentes, sino en su conjunto, y además a los impugnadores se les dio a conocer su evaluación de manera privada.

A partir de esos 60 nombres el CTE seleccionó veinte para integrar las dos quintetas de mujeres y las dos de hombres que pasarían a la consideración de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Y ahí estalló el conflicto. Ackerman se retiró antes de concluir la votación de los veinte nombres y acusó al resto del CTE de excluir a los mejores perfiles, que para él eran los más cercanos a las luchas democráticas, y de incluir en las quintetas a personas con trayectorias cuestionables o que habían sido cómplices de fraudes electorales en el pasado. En suma, se deslindaba del proceso e implícitamente convocaba a los diputados radicales de la coalición morenista a rechazar las quintetas aprobadas por el CTE.

Los diputados del PT y algunos diputados de Morena le exigieron a su coordinador parlamentario que la Jucopo rechazara las quintetas y le exigiera al CTE que elaborara otras. Todo esto ocurría en medio de declaraciones cotidianas de AMLO contrarias al INE, como desde el inicio de su gobierno, de acusaciones a los anteriores consejeros de haber sido cómplices del fraude, de ser el organismo electoral más caro del mundo, etc., etc.

Lo cierto es que la solicitud de los diputados morenistas y petistas difícilmente podía ser respondida afirmativamente en el contexto del procedimiento previsto en el artículo 41 constitucional. Una vez aprobadas las quintetas por el CTE y remitidas a la Jucopo, ésta debe impulsar la construcción de los acuerdos y proponer al pleno de la Cámara los nombramientos. Con esta acción finalizan las tareas de la CTE y por tanto se disuelve. Si la

cámara no logra la mayoría calificada exigida por la Constitución, entonces debe hacer el nombramiento mediante insaculación de entre las propuestas incluidas en la lista integrada por el CTE, y si esto no ocurre será la SCJN la que haga dicho nombramiento también por insaculación de la misma lista conformada por el comité de evaluación. Por lo tanto, no había forma de rechazar las quintetas y solicitar la elaboración de nuevas. Ante eso el grupo parlamentario de Morena se dio a la tarea de encontrar en las cuatro quintetas a las y los candidatos/as aceptables para la coalición gobernante.

El día 21 de julio, un día antes del periodo extraordinario de la Cámara de Diputados que debía realizar los nombramientos, el grupo parlamentario de Morena, encabezado por su coordinador Mario Delgado, entrevistó a siete aspirantes, totalmente fuera de las reglas establecidas para el proceso. Al final los diputados morenistas salieron de la reunión con los nombres de los cuatro aspirantes aceptables para ellos, que son exactamente quienes finalmente fueron nombrados. Los otros partidos trataron de que se consideraran algunos otros aspirantes, pero finalmente aceptaron las cuatro propuestas de Morena y sus aliados, mismas que el día 22 de julio fueron aprobadas por 399 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.

El propio Ackerman, que de miembro del CTE pasó a convertirse en líder de los morenistas y petistas rebeldes, planteó que el resultado final logró rescatar tres perfiles verdaderamente ciudadanos (es decir, cercanos a Morena), de lo cual se deduce que el cuarto perfil sería representante de los vicios del pasado. Pero un análisis detallado muestra que en ese momento los cuatro fueron aceptables para Morena, que con sus diputados y los de sus aliados tenían la mayoría calificada para nombrarlos. Sin embargo, la oposición aceptó los nombramientos, que finalmente fueron presentados como resultado de un gran consenso.

De los cuatro consejeros nombrados, dos tienen como antecedente algún vínculo con el PRD y con Morena. Norma Irene de la Cruz fue asesora (2000-2001) del entonces senador perredista por Chiapas y actual gobernador morenista de ese estado, Rutilio Escandón. Un dato curioso es que el mismo día que venció el periodo de inscripción como aspirante a consejera (28 de febrero), inició un juicio de amparo en contra de la Jucopo, que evidentemente no procedió por tratarse de materia electoral, registrado con el número 290/2020, el 28 de febrero de 2020, ante el Primer Circuito del Juzgado Décimo Tercero de

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (sic). Por supuesto, queda la duda de por qué se quería amparar. En la primera etapa fue excluida después del examen, pero solicitó reconsideración y la dejaron pasar a la siguiente etapa. Su ensayo fue el más pobre de los integrantes de las quintetas (cuatro páginas y media, a pesar de que las reglas permitían una extensión de veinte), lo que contrasta con su supuesta experiencia en labores de observación internacional de elecciones (su única experiencia en materia electoral). Además, de la consulta de su CV y una búsqueda en internet se constata que no cuenta con obra publicada ni con antecedentes laborales en el ámbito electoral o gubernamental en México durante los quince años anteriores a su nombramiento. Semanas después del nombramiento, se supo (Reforma, 17/Sept/2020) que De la Cruz al momento de inscribirse tenía la nacionalidad inglesa (además de la mexicana) y que participó como observadora electoral en varios países, incluyendo México en 2018, en su calidad de ciudadana inglesa. Resulta, entonces, un misterio cómo fue posible su nombramiento como integrante del máximo órgano de dirección del INE, en abierta violación del artículo 38 de la LGIPE, que establece que el primer requisito para ser Consejero Electoral es “ser ciudadano por nacimiento que no adquiriera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos”.

Por su parte, Uuc-Kib Espadas fue diputado por el PRD (2000-2003) y ocupó cargos de dirección en ese partido hasta 2007 que renunció al mismo. Su CV no incluye experiencia como miembro de organismos electorales y su ensayo (de once páginas) fue una colección de testimonios personales de su militancia en partidos de izquierda con referencias a la organización de las elecciones. Ha publicado textos sobre el sistema político mexicano y publicaba regularmente artículos de opinión en un medio de Yucatán.

Los otros dos consejeros sí tienen experiencia en organismos electorales. Carla Humprey Jordan fue asesora de los consejeros del IFE Alonso Lujambio y Arturo Sánchez, ambos propuestos por el PAN. Posteriormente fue consejera en el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (2005-2012), propuesta por el PAN. Se le consideraba cercana a ese partido porque su esposo (Roberto Gil Zuarth) fue secretario particular del presidente Felipe Calderón, aspirante a presidente nacional del PAN y senador por ese mismo partido. En 2010 cometió la imprudencia de acompañar a su esposo a su acto de registro como

candidato a la presidencia del PAN, lo cual fue difundido ampliamente por los medios, con fotografías de ambos junto a la bandera del partido. Eso le costó la postulación a la Presidencia del CG del IEDF que prácticamente ya tenía amarrada antes del incidente (La Jornada, 4/Nov/2010). Posteriormente aspiró a ser consejera del INE en 2014 y 2017, y al no resultar nombrada este último año rompió públicamente con el PAN, al que acusó de no apoyar a una mujer para ese cargo, después de lo cual se incorporó al gobierno actual como funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al frente de la cual está Santiago Nieto, muy cercano al presidente AMLO. Probablemente ese hecho influyó para que resultara aceptable para la dirigencia de Morena. Su ensayo es uno de los más completos y revela un gran conocimiento del tema electoral. Posteriormente se supo que no solamente trabajaba en la UIF bajo las órdenes de Santiago Nieto, sino que tenía una relación sentimental con él (Revista Quién, 27 de abril de 2021) y finalmente se casaron. Sin menoscabo de su conocimiento y experiencia, resulta evidente que el aval de Nieto resultó decisivo para su nombramiento.

Finalmente, José Martín Fernando Faz Mora tiene una carrera vinculada a las organizaciones ciudadanas defensoras de derechos humanos y ha sido consejero tanto en el Consejo local del entonces IFE como en el OPLE del estado de San Luis Potosí, del cual formaba parte al momento de su nombramiento. No se le conoce militancia partidaria, pero seguramente resultó aceptable para Morena por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

En conclusión, los nombramientos se produjeron con un gran consenso, que no se convirtió en unanimidad debido a que cinco diputados de Morena votaron en contra y otros cinco también de Morena se abstuvieron. Así llegó el Consejo General del INE al inicio del proceso electoral de 2021. Uno de sus retos más grandes ha sido sin duda hacer frente al intenso activismo del Presidente de la República, que verdaderamente se convirtió en líder y vocero de su partido durante el proceso electoral.

Por lo que hace al TEPJF, también se ha desarrollado un proceso de captura presidencial, que va desde la resolución sobre el fideicomiso para apoyar a los damnificados, la nunca explicada renuncia de la Magistrada Presidenta, la sentencia que obligó al INE a organizar una encuesta para elegir a los dirigentes de Morena (no prevista en el Estatuto de ese partido),

hasta la de aprobar los registros de tres partidos aliados del Presidente y el rechazo al registro del partido vinculado al expresidente Calderón. Pero ese tema es materia de otro análisis.

El proceso electoral de 2021

En los primeros días de septiembre inició el proceso electoral más grande de la historia reciente, con el Consejo General del INE ya completo y con los consejos generales de los OPLEs ya renovados, con las mismas reglas del juego que el de 2018.

Cerca de 94 millones de ciudadanas y ciudadanos estaban convocados a acudir a las urnas el domingo 6 de junio para votar en elecciones federales y locales. Además de la elección federal intermedia, en la cual se renovaron los 500 asientos de la Cámara de Diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, hubo comicios locales en las treinta y dos entidades federativas. En quince estados estuvo en juego la gubernatura: las dos Baja Californias, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Se disputaron 1,063 diputaciones locales (642 de mayoría y 421 de representación proporcional) en treinta entidades. Solamente Coahuila y Quintana Roo no renovaron sus congresos locales. Finalmente estuvieron en disputa los ayuntamientos de 1,926 municipalidades (lo que incluye las 16 alcaldías en la Ciudad de México). Solamente en Durango e Hidalgo no hubo elecciones municipales.

El gobierno surgido de la elección de 2018 se enfrentó a la prueba de las urnas. La coalición gobernante ganó una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y posteriormente la convirtió en calificada gracias a la absorción del PVEM, antes aliado del PRI, y de buena parte de los legisladores del PRD que migraron a sus filas, mientras que en el Senado tiene el 60% de los legisladores. Eso le ha permitido aprobar algunas reformas constitucionales y muchas reformas legales, lo que le ha otorgado la comodidad necesaria al gobierno del presidente AMLO. La gran incógnita era si lograría repetir esa hazaña y mantener esa cómoda mayoría en la cámara baja en la segunda mitad del sexenio. Por supuesto, el propio AMLO apostaba a que la aplicación durante dos años y medio de sus políticas sociales clientelares y la realización de sus grandes obras insignia (la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe

Ángeles y el Tren Maya), le permitieran superar ampliamente el porcentaje de votación de 2018.

Para la oposición el gran reto era tratar de mantenerse con vida. El gran dilema que enfrentaron era presentarse por separado o formar una coalición para enfrentar la mayoría avasalladora del bloque gobernante. El Presidente AMLO denunció en su conferencia mañanera del 9 de junio de 2020 un supuesto plan conspiracionista para formar un Bloque Opositor Amplio (BOA), en el que involucró a partidos, intelectuales y hasta funcionarios electorales, como si la formación de una coalición opositora fuera un hecho delictivo (El Universal, 9/Junio/2020), olvidando que el actual gobierno es resultado de una coalición entre tres partidos (Juntos Haremos Historia, formada por Morena, PT y PES), misma que se repite para el proceso electoral de 2021, sin el PES pero ahora con el PVEM.

Finalmente tres partidos opositores (PAN, PRI y PRD) lograron formar la coalición *Va por México*, que AMLO prefiguró con el BOA, para participar en elecciones federales y locales, en tanto que MC prefirió participar en solitario. Y por lo que hace a los partidos nuevos que obtuvieron su registro, Partido Encuentro Solidario (reencarnación del anterior PES, que en 2018 se alió a Morena), Redes Sociales Progresistas (vinculado a la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo) y Fuerza Social por México (vinculado al senador suplente de Morena y supuesto dirigente sindical Pedro Haces), hay que recordar que por ley en su primera elección se vieron obligados a participar en solitario, sin participar en coaliciones electorales.

En el nivel de la política local, entre las elecciones de 2018 y las de 2019, el partido del Presidente logró ganar siete gubernaturas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Morelos (en alianza con el PES), Puebla, Tabasco y Veracruz. Diversas encuestas indicaban que en 2021 tenía gran probabilidad de ganar un buen número de gubernaturas, con lo cual podría controlar más de la mitad de esas posiciones de poder local. El gran reto del PRI era conservar algunas de las gubernaturas que aún tenía, y no se diga el PRD, que llegó al proceso electoral con la gubernatura de Michoacán. Finalmente, el PAN también enfrentaba el reto de retener algunas gubernaturas, incluyendo algunas que ganó en coalición con el PRD en el pasado (como la de Nayarit).

En el terreno de los congresos locales hay que recordar que la elección de 2018 le permitió a la coalición encabezada por Morena tener la mayoría en 19 (Becerra Chávez, en prensa), a

los que hay que sumar los dos que logró en 2019, lo que le ha permitido tener una mayoría de congresos locales, uno de los requisitos para aprobar cualquier reforma constitucional (los otros dos son: a) mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que ya la tiene, y b) mayoría calificada en el Senado, que no la tiene).

Este conjunto de procesos electorales, el federal y los locales, se produjo en el contexto de tres grandes crisis. La crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 estableció un marco muy complicado para realizar los trabajos de preparación y organización de las elecciones, como ya se vio con las locales de Coahuila e Hidalgo de 2020, que debían haberse realizado en junio y que se trasladaron al mes de octubre. El inicio del año electoral tuvo lugar cuando la mayor parte del país se encontraba en semáforo naranja y rojo. Sin lugar a dudas, se trató de un enorme reto organizativo para el INE y los OPLEs.

La segunda crisis que definió el contexto de las elecciones es la económica, que en 2019 inició como estancamiento y que en 2020 se concretó en una caída del 8% del PIB y lanzó al desempleo a una gran cantidad de mexicanos. Por último, la tercera es la crisis de inseguridad, que a pesar de la pandemia no ha dejado de incrementar la cifra negra de homicidios en todo el país.

Esta triple crisis colocó al INE y a los 32 OPLEs frente a un gran reto, pues debieron garantizar la realización de las elecciones y todas sus tareas preparatorias (actualización del padrón, ubicación de las casillas, capacitación de los ciudadanos que se desempeñarían como funcionarios electorales, entre otras) en la situación más riesgosa del pasado reciente. A todo lo anterior se sumaría la incesante intromisión presidencial en el proceso electoral.

La intervención presidencial en el proceso electoral

El proceso electoral inició formalmente el siete de septiembre, con la sesión del Consejo General del INE, tal como lo establece la ley. Pero la política real tiene otros ritmos y en los hechos desde varios meses atrás se habían vivido adelantos informales de que el presidente López Obrador desarrollaba su propio estilo de intervención en las cuestiones electorales.

Por supuesto, en todo país democrático los gobernantes que han llegado al poder gracias al voto ciudadano se esfuerzan por mantener su popularidad y la de sus partidos con base en las políticas públicas que ponen en marcha, además de que mantienen su derecho a participar en

sus partidos políticos. Pero para ello deben utilizar medios legítimos de hacer política y no utilizar los recursos del estado para sus tareas partidarias.

El presidente López Obrador se deslindó discursivamente de su partido desde el inicio de su gobierno. Incluso llegó a decir que si Morena se desviaba del buen camino, él mismo podría renunciar a su militancia partidaria. Más de una vez el presidente ha repetido que gobierna para todos los mexicanos pero también desde un principio desarrolló un discurso de polarización entre los que lo apoyan y quienes lo critican. Ha insistido que se está con él, que representa el cambio verdadero (la “cuarta transformación”) o se está con los conservadores, los “fifís”, los que añoran el pasado de corrupción y privilegios del neoliberalismo, saco en el que mete a todos los partidos de la oposición.

Desde antes incluso de su toma de protesta como presidente constitucional, el presidente acusó al INE de ser parte de los conservadores, con motivo de la multa de 197 millones de pesos que la autoridad electoral le impuso a Morena por el fideicomiso para los damnificados del sismo de 2017 (El Universal, 18 de julio de 2018). A partir de ahí, no han cesado sus ataques al INE, al cual acusa de ser muy costoso porque sus funcionarios ganan mucho (según él) y de haber solapado los supuestos fraudes electorales de 2006 y 2012, con los que justificó sus derrotas.

Un ejemplo muy interesante de los ataques presidenciales contra el INE es el que tuvo como detonante la negativa del registro al partido México Libre, dirigido por la esposa del expresidente Felipe Calderón. El presidente dijo que de haberse concedido dicho registro “el INE se acaba, si de por sí están totalmente desacreditados”. En esta ocasión incluso calificó la negativa del registro como un “gran triunfo del pueblo”, resultado de una verdadera “justicia divina” (El Universal, 5/Sept/2020).

En otra ocasión el presidente arremetió contra los partidos opositores, los medios e intelectuales críticos, los empresarios e incluso miembros del Tribunal Electoral y del INE, como conspiradores que preparan un bloque opositor amplio, el supuesto BOA (AMLO, 9/ Junio/2020). Esta denuncia la presentó en su conferencia mañanera con base en un documento que según él le hizo llegar “el pueblo”, pero del que no se tomó la molestia de verificar su autenticidad. Cuando le cuestionaron si formar una coalición opositora violaría

la ley simplemente respondió que le divertía exhibir a los conservadores que hacen las cosas a escondidas.

En esta misma tónica, el presidente convirtió el caso Lozoya, presuntamente vinculado a los sobornos de Odebrecht, en tema central de sus mañaneras, del que exhibió un video filtrado y la supuesta demanda del exdirector de Pemex, que de acusado de graves delitos de corrupción se convirtió en demandante de justicia. Aunque la FGR se deslindó de esas filtraciones, resulta evidente que procedieron de ahí, sobre todo si se recuerda que aparecieron después de que el propio presidente declarara que el pueblo debía conocer los videos (se decía que Lozoya tenía varios) y la demanda, después de lo cual mágicamente aparecieron. El evidente objetivo de AMLO ha sido incriminar, en ese caso emblemático de la corrupción del sexenio de Peña Nieto, a los panistas (y sobre todo al expresidente Calderón) más que a los priistas, seguramente con la esperanza de que éstos puedan ser cooptados por el partido del presidente. AMLO convirtió un tema judicial, que debía seguir un camino riguroso, en un espectáculo mediático para golpear a la oposición.

En esas estaba muy entretenido el presidente cuando le respondieron con la filtración de dos videos y un audio de 2015 que exhibían a su hermano Pío recibiendo dinero de David León (operador político del PVEM y del entonces gobernador de Chiapas Manuel Velazco), quien había sido convertido en un funcionario estrella del gobierno federal (era coordinador nacional de Protección Civil, acababa de ser nombrado titular de la agencia gubernamental para la compra de medicamentos y era presentado como ejemplo de honestidad por AMLO). Los materiales mostraban que el hermano del presidente recibió de manera sistemática dinero destinado al “licenciado”, que anotaba rigurosamente en una libreta, a la que llamaba “la biblia” (*Latinus*, 20/Agosto/2020); La respuesta del presidente no pudo ser más lamentable. Reconoció que su hermano sí recibía dinero para “el movimiento” (es decir, Morena), pero que ese dinero provenía de “aportaciones” del pueblo. Incluso llegó al extremo de comparar esas aportaciones con lo que ocurrió en los momentos revolucionarios del país (AMLO, 21/Agosto/2020).

La consulta, estrategia electorera

Uno de los temas más frecuentes con los que AMLO incidió en el proceso electoral es el de la consulta para que el pueblo decidiera si se juzgaba a los expresidentes de la era neoliberal por actos de corrupción, que finalmente la SCJN convirtió en otra cosa muy diferente. Insistía en que la consulta se realizara el día de la jornada electoral, desconociendo que, de acuerdo al artículo 35 constitucional reformado en 2019, debe realizarse el primer domingo de agosto. Su objetivo siempre fue convertir el tema de la consulta en el centro del proceso electoral para mostrar el contraste entre el pasado neoliberal de corrupción y privilegios y su gobierno, a pesar de que AMLO había insistido que de realizarse la consulta él votaría por la opción de no juzgarlos, ya que prefería una política de borrón y cuenta nueva. Planteaba que sería muy desgastante procesar a los corruptos del pasado, que no alcanzarían los tribunales para juzgarlos y las cárceles de México para encerrarlos. Remataba con una frase que ha repetido a lo largo de los dos últimos años, su fuerte no es la venganza, confundiendo justicia con venganza.

El discurso presidencial se ubicó desde un principio en el terreno de la estigmatización. Hay que exhibir a los corruptos del pasado, mostrar ante el pueblo sus excesos para impedir que se repitan en el futuro. Había que hacer que la sociedad rechazara a los corruptos, que la corrupción ya no fuera un camino atractivo para la gente. Pero en la denostación cotidiana de la corrupción y los corruptos resultaba obvio que AMLO dedicaba más tiempo al sexenio de Calderón que al de Peña Nieto, lo que fortalecía la hipótesis de que entre AMLO y EPN existía un pacto de impunidad.

Mientras las cosas marchaban más o menos bien, AMLO olvidaba el tema de la consulta sobre los expresidentes, pero con el recrudecimiento de la crisis económica debido a la pandemia, y en vísperas del inicio del proceso electoral, resultó necesario desempolvar el tema, para lo cual resultó ideal la captura del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuyos testimonios podrían resultar de utilidad para dilucidar si los sobornos de Odebrecht fueron a dar a la campaña electoral de Peña Nieto en 2012. Por eso el presidente insistió en la necesidad de la consulta porque le ofrecía la posibilidad de imprimir su sello al proceso electoral recién iniciado. Así se convertiría la elección en un referéndum sobre el gobierno actual en relación al pasado reciente.

Su partido y sus simpatizantes se movieron para acopiar las firmas necesarias para solicitarla (poco más de un millón 800 mil), pero al ver que difícilmente lo lograrían, el propio AMLO presentó su solicitud ante el Senado. Finalmente, sin embargo, un grupo de ciudadanos sí logró entregar un número importante de firmas ante el Senado, de tal manera que se presentaron dos solicitudes. En cualquier caso la SCJN debía resolver primero la constitucionalidad de la materia de la consulta.

Con respecto a la presentada por el presidente, el ministro ponente, Luis María Aguilar, presentó su proyecto que la declaraba inconstitucional y el Pleno de la SCJN debía resolver al respecto el jueves primero de octubre. Era un reto muy fuerte para la SCJN. Hay que recordar que desde el principio de su gobierno AMLO presionó fuertemente a la Corte, hasta que logró obtener el apoyo del ministro presidente, Arturo Zaldívar, y logró colocar a tres ministros cercanos a él.

Por supuesto que AMLO esperaba que la Corte avalara su consulta tal como la solicitaba. Pero también si la Corte la rechazaba por inconstitucional (que era lo más lógico), el presidente estaba dispuesto a cobrárselo caro porque acusaría a los ministros de no haber oído el justo reclamo popular porque siguen siendo leales al antiguo régimen de corrupción y privilegios. AMLO quería ganar fuera cual fuera la resolución de la Corte.

El documento que presentó AMLO enumeraba los supuestos delitos por los que los expresidentes del periodo neoliberal debían ser juzgados. Salinas, cuyo periodo presidencial fue resultado de un fraude electoral (pero, por supuesto, no mencionaba el papel de su funcionario consentido Manuel Bartlett en dicho fraude) inició ese periodo y privatizó muchas empresas públicas. Zedillo lo continuó e instrumentó el Fobaproa, que endeudó al país por generaciones. Fox forzó un fraude electoral al final de su gobierno para impedir el triunfo de AMLO. Calderón llegó a la presidencia gracias al fraude y desarrolló la guerra contra el crimen organizado. Finalmente Peña Nieto ganó su elección gracias a los millones que Odebrecht le dio por medio de Lozoya. Durante esos cinco sexenios el modelo neoliberal “se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social, en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de

millones de jóvenes y adultos mayores, en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves” (AMLO, 15/Sept/2020)

El proyecto del ministro Aguilar proponía que la materia de la consulta, es decir, que la ciudadanía decida si se investiga y procesa a los expresidentes, debía ser declarada inconstitucional, debido a que si AMLO o cualquier ciudadano consideraban que había graves delitos por los que se podía juzgar a los expresidentes, nada les impedía presentar las denuncias correspondientes, acompañadas de las pruebas respectivas, ante la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que los expresidentes no están protegidos por el fuero constitucional que tuvieron durante el ejercicio del cargo. Por tanto, el proyecto proponía que para proceder contra los expresidentes no se requería consulta alguna. La aplicación de la ley no puede estar sujeta a la consulta a la ciudadanía.

Pero ocurrió lo impensable: una mayoría de seis ministros aprobó la constitucionalidad de la consulta con un conjunto de argumentos verdaderamente extraños. Se llegó a plantear que era importante integrar al pueblo en la toma de ese tipo de decisiones y el mismísimo Ministro Presidente llegó a decir que la consulta no necesariamente tenía que ser vinculatoria, lo que resulta absurdo tomando en cuenta que se trata de la consulta prevista en el artículo 35 constitucional, que necesariamente aspira a tener un resultado vinculatorio. Pero lo más extraño fue que después de aprobar la constitucionalidad de la materia, la Corte modificó la pregunta para excluir por completo lo fundamental de dicha materia. La pretensión de investigar y juzgar a los expresidentes se convirtió en la posibilidad de “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” (La Jornada y El Universal, 2 de octubre de 2020). Era una pregunta tan general e indefinida que podía significar todo y nada, cuyo resultado difícilmente podría conducir a decisiones claras de política pública y mucho menos al supuesto “juicio a los expresidentes”.

Con esto la Corte le garantizó al presidente que el tema de la consulta gravitara fuertemente a lo largo del proceso electoral. Aunque la pregunta que la Corte aprobó no lo decía, el presidente siguió diciendo que el objetivo de la consulta era que el pueblo decidiera si se

debía juzgar a los expresidentes, lo que le permitió inmiscuirse permanentemente en el proceso electoral.

Así, el seis de noviembre de 2020 AMLO planteó que “La pregunta está un poco ambigua, confusa, pero al final será sí o no; en esencia es “¿quieres que se juzgue de conformidad con la ley, respetando los derechos humanos a los expresidentes, sí o no?” Entonces ya va a llegar al momento que muchos van a saber cómo votar, es decir, si es no o sí, qué significa el sí, qué significa el no, se va a ir aclarando...lo importante es que los mexicanos vamos a ir a plantear si queremos que se juzgue a los expresidentes” (El Universal, 6 de noviembre, 2020).

Con estos pronunciamientos el presidente violaba abiertamente el artículo 35 constitucional, debido a que el proceso de consulta popular inició con la publicación de la convocatoria oficial, lo que ocurrió el 28 de octubre (Diario Oficial de la Federación, 28/Octubre/2020). De acuerdo a dicho artículo se debe suspender la difusión de propaganda gubernamental durante dicho proceso, además de que el INE es legalmente la única instancia a cargo de la difusión de la consulta, a pesar de lo cual AMLO seguía hablando en sus conferencias mañaneras de su peculiar interpretación de la consulta y llamando a los mexicanos a votar en ella. Por eso el 19 de noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado por medio de la cual se reformó el artículo primero transitorio de la convocatoria, con la finalidad de establecer el inicio del proceso de consulta popular el día 15 de julio de 2021 (Diario Oficial de la Federación, 19/Nov/2020). Esto implica que la suspensión de propaganda gubernamental y la prohibición al presidente para hablar de la consulta estarían vigentes entre el 15 de julio y el domingo primero de agosto en que se realizó, pero igualmente durante dicho periodo el presidente se cansó de violar lo previsto en el 35 constitucional.

La conferencia mañanera como medio de intromisión presidencial en el proceso electoral

La conferencia mañanera se ha convertido en el centro del gobierno de López Obrador. Ahí se establece la agenda del día, se dan órdenes que los miembros del gabinete deben retomar al instante, se ataca a los adversarios del día (algún periódico al que se llama “pasquín

inmundo”, algún periodista o intelectual cuyas críticas disgustan al señor de Palacio, los expresidentes del periodo neoliberal –particularmente Calderón-, algún empresario o grupo de empresarios, etc.). Además, en las mañaneras el presidente ensaya sus chistes, repite sus frases que ya se han convertido en verdaderos lugares comunes (“mi fuerte no es la venganza”, “mi pecho no es bodega”, “soy dueño de mi silencio”, etc., etc.), proyecta gráficas, videos y hasta canciones para no aburrirse.

Pero desde septiembre de 2020 la mañanera se convirtió en el principal vehículo del presidente para inmiscuirse abiertamente en el proceso electoral. AMLO, que como candidato en 2006 se quejaba de los spots presidenciales de Fox que trataban de incidir en el proceso electoral con frases como “si seguimos por el mismo camino”, “no se puede cambiar de caballo a la mitad del río” o que ocasionalmente respondía a las críticas de AMLO como candidato, ahora se esforzó para intervenir de manera cada vez más evidente en el proceso electoral sin preocuparse por las formas.

Desde al inicio de las mañaneras, el presidente desarrolló un discurso polarizador. Su mensaje central ha sido: o están con el gobierno que encabeza y que está llevando a cabo la “cuarta transformación” o están en contra y forman parte del campo de los conservadores y los fifís. El presidente insistió que eso es lo que estaba en juego en las elecciones de 2021.

Además de los ataques contra las organizaciones que participan en la vida política del país, AMLO acentuó sus ataques contra los medios críticos, sean periódicos (como Reforma, El Universal, a los que incluso ha llamado “pasquines inmundos”), revistas de cultura y política (como Proceso, Nexos y Letras Libres, a las que acusa de haber sido financiadas por los gobierno neoliberales) y organizaciones no gubernamentales que realizan investigación social y política (como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a las que acusa de estar financiadas por el extranjero o por empresarios contrarios a él). En este contexto, el presidente planteaba que: “Se está cumpliendo lo que hemos dicho, en la historia de México, en las etapas puede haber dos agrupamientos distintos y contrapuestos, los conservadores y los liberales, siempre ha sido así, entonces está muy bien, porque son tiempos de definición” (AMLO, 11/Nov/2020).

Por supuesto que el presidente es un ciudadano con derecho a militar en el partido que lo llevó a la presidencia y que tiene todo el derecho de apoyarlo y hacer declaraciones a su favor. En otros países con sistema presidencial de gobierno, el presidente participa en la campaña del candidato de su partido, o incluso donde existe la reelección el propio presidente en funciones es candidato a reelegirse y hace campaña, pero se mantiene el espacio del presidente en funciones a salvo de las controversias partidarias. El gran problema en nuestro país es que el presidente AMLO hacía abiertamente posicionamientos partidarios contra la oposición en los espacios y con el presupuesto que tiene gracias a su cargo de presidente de la república, en las mañaneras y las giras presidenciales, organizadas y difundidas con los recursos del estado mexicano, lo que evidentemente amplifica su efecto. No sería lo mismo si hiciera esos planteamientos en los espacios y con los recursos de su partido, cosa a lo que tiene perfectamente derecho como ciudadano.

En la conferencia mañanera del 23 de diciembre afirmó que los conservadores “van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular... “que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados...Va a ser una elección interesantísima porque la gente va a decidir ¿Qué quieren? ¿Más de lo mismo? ¿O retrocesos?, ¿o quieren que sigamos adelante?... se unen los conservadores para detener el proceso de transformación”. Ante estas declaraciones el PRD denunció ante el INE que el presidente utilizaba ese espacio, al que comparece como titular del Poder Ejecutivo, para hacer posicionamientos a favor de su partido y en contra de los partidos opositores.

El 30 de diciembre la Comisión de Quejas del INE aprobó medidas de *tutela inhibitoria* para evitar que el presidente incurriera de nuevo en tales declaraciones en el futuro inmediato. Ante la impugnación de la Presidencia de la República, la Sala Superior del TEPJF resolvió revocar el acuerdo de la Comisión y ordenó al Consejo General del INE pronunciarse al respecto, debido a la importancia y novedad del tema derivado de las conferencias mañaneras.

El 15 de enero el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG26/2021 en el que se establecieron medidas cautelares para que el Presidente y los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades evitaran pronunciarse sobre temas electorales. Se consideran medidas de *tutela inhibitoria* porque buscan frenar dichas conductas que pueden generar un

desequilibrio en la contienda o en las preferencias electorales, no sancionarlas. Entre las áreas que los funcionarios mencionados deben evitar en sus declaraciones se encuentran el ejercicio de las prerrogativas, la vida interna de los partidos, las candidaturas, los cargos de elección, las etapas de los procesos electorales, los frentes y coaliciones, las plataformas, las campañas y las estrategias electorales, así como las encuestas en la materia.

En un principio y con la finalidad de acatar la orden del TEPJF, el Acuerdo se limitaría exclusivamente al Presidente de la República, pero finalmente el CG del INE aprobó que esas medidas serían extensivas “a las y los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a todas las personas servidoras públicas de cualquier nivel u orden de gobierno”. También se precisó que la instancia encargada de pronunciarse al respecto sería la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, a pesar de que el TEPJF había planteado que esa atribución debiera corresponderle al Consejo General, debido a que originalmente se trataba de las conductas del presidente.

El presidente López Obrador se inconformó con el acuerdo del INE y un mes después, el 17 de febrero la Sala Superior del TEPJF resolvió revocarlo y por lo tanto dejar sin efecto las medidas establecidas en él. La Sala Superior determinó que el INE trató de imponer medidas de no repetición, ante la supuesta posibilidad de que ocurra un acto lesivo futuro de carácter ilícito, pero dichas medidas solamente pueden ser establecidas por el tribunal después de un estudio de fondo. De acuerdo con este argumento, el INE se habría extralimitado al prever conductas futuras similares a hechos que ya han sido impugnados (las declaraciones sobre temas electorales), pero hasta ese momento el tribunal no había considerado ilícitas tales conductas, a pesar de que ya se habían presentado varias impugnaciones. Además, el INE extendió las medidas cautelares a titulares de poderes ejecutivos locales y a funcionarios públicos de todos los niveles, a pesar de que la orden del TEPJF se refería exclusivamente al Presidente de la República. Finalmente, el acuerdo del INE delegó a la Comisión de Quejas la aprobación de las medidas cautelares de tutela inhibitoria, a pesar de que el TEPJF había ordenado que debía ser el Consejo General el responsable de pronunciarse al respecto.

Sin embargo, a pesar de dejar sin efecto lo acordado por el INE, la propia sentencia del TEPJF aclara que “no prejuzga ni representa un pronunciamiento de fondo sobre las conductas denunciadas en el procedimiento especial sancionador que dio origen a las medidas que

revoca esta resolución” (Boletín, SS-TEPJF, 17 de febrero de 2021). El propio Magistrado Presidente del TEPJF, José Luis Vargas, aclaró que el fondo del asunto de las declaraciones presidenciales sobre temas electorales aún no se resolvía. En un boletín dado a conocer el 19 de febrero por el propio tribunal se informó que aún había “seis o siete” impugnaciones que debían ser resueltas en fechas posteriores.

En este contexto el presidente AMLO convocó el 23 de febrero, en su mañanera y frente al presidente argentino de visita en México, a los gobernadores de las 32 entidades federativas a firmar un *Acuerdo Nacional por la Democracia*, en el que las diversas instancias de gobierno se comprometían a un conjunto de medidas para “establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable”, dejando atrás “los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales” (AMLO, 23/Feb/2021). Ese acuerdo consistiría en el compromiso de “no intervenir para apoyar a ningún candidato de ningún partido, no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, impedir la compra de conciencias, no traficar con la pobreza de la gente, no solapar a mapaches electorales, evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales antidemocráticas”

Después de los excesos discursivos en que incurrió el presidente AMLO al insultar permanentemente a la oposición y de promover incansablemente a su propio partido, resultaba paradójico proponer a los gobernadores provenientes de los diversos partidos un acuerdo por la democracia. Era como si el lobo invitara a cenar a las ovejas, prometiéndoles que no se las comería porque él “es diferente”, porque las cosas “ya cambiaron”.

El problema es también que en estos dos años y medio de su gestión, el presidente desarrolló toda una estructura institucional para la compra y la coacción del voto, mediante sus programas sociales y el ejército de operadores, los “servidores de la Nación”, que recorren el país, visitando casa por casa para entregar los beneficios de esos programas, que se otorgan a nombre del presidente (Hernández Estrada, 2019). AMLO mismo ha dejado muy claro que esos beneficios son otorgados de manera directa por el gobierno federal que él encabeza, sin intermediarios. Por eso recorre el país en una gira interminable, como un candidato en

campaña, recordando permanentemente que solamente él es la garantía de que esos beneficios lleguen a los pobres y que si llegaran los partidos hoy opositores al gobierno, esos beneficios se perderían.

El 23 de marzo, en una sesión virtualmente clandestina, de la cual no hay constancia en el sitio electrónico de la presidencia, se firmó el “Acuerdo Nacional por la democracia” por el presidente de la república y la presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora. Los medios de comunicación dieron cuenta del evento, pero sus reporteros no estuvieron presentes, porque no fueron convocados, y las pocas fotografías publicadas fueron proporcionadas por la propia presidencia de la república. Las pocas crónicas de detalle publicadas se elaboraron sobre la base de testimonios de algunos de los gobernadores presentes, a quienes ni siquiera se les dio copia del documento firmado y menos se les permitió hablar en el evento. Ese 23 de marzo solamente hablaron el propio presidente López Obrador, la gobernadora Pavlovich, el titular de la FGR, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, antiguo amigo y colaborador del presidente (El Universal, 23 de marzo de 2021). Por supuesto, los titulares del INE y el TEPJF, los más directamente involucrados en el proceso electoral, simplemente no fueron invitados.

Dado que el texto del supuesto acuerdo nunca fue publicado pero se reiteró lo planteado el 23 de febrero, según los testimonios, se puede suponer que los principales compromisos eran los planteados en aquella ocasión. La idea central era que solamente el presidente de la República podía ser el “guardián” efectivo de la celebración de elecciones democráticas.

Como para demostrar la inutilidad del supuesto acuerdo por la democracia, dos días después de firmado AMLO se lanzó contra el INE, al “denunciar” una supuesta conspiración para arrebatárle la mayoría en la cámara de diputados por parte de sus villanos favoritos (Claudio X. González, Enrique Krauze, los intelectuales orgánicos, los medios de comunicación, etc.). Ese día planteó “yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han (sic) prestado a los fraudes electorales o se han (sic) hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales...” Y luego reiteró que en 2006 y 2012 le robaron la presidencia con

la complicidad del INE (en esos días era el IFE, pero para AMLO eso no tiene importancia). Coronó ese exabrupto con el planteamiento de que en 2018 triunfó gracias al voto ciudadano, a pesar del INE, y además “he hecho el reconocimiento al presidente Peña porque no se metió, como lo hizo abiertamente el presidente Fox y el presidente Calderón” (AMLO, 25/Marzo/2021). Entonces, para AMLO su triunfo fue posible porque Peña sí respetó el proceso electoral, no gracias a la organización de la elección por parte del INE.

El 13 de abril se publicó en el Diario Oficial un “Acuerdo por el que se exhorta a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a cumplir con la normativa en materia electoral”, cuyo punto V establece que los servidores públicos federales deben abstenerse durante las campañas electorales de difundir “mensajes destinados a influir en las preferencias electorales, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos; menciones al proceso electoral o expresiones vinculadas a éste como "voto", "sufragio", "comicios; "elección", "elegir", "proceso electoral" y cualquier otra similar” (Diario Oficial de la Federación, 13/Abril/2021). Pero como era de esperarse, el primero en incumplir tal obligación fue precisamente el presidente AMLO, quien, en lugar de disminuir su activismo propagandístico y electoral, lo aumentó.

Ante la problemática de la cancelación por el CG del INE del registro de los candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, que omitieron la presentación de sus informes de gastos de precampaña, AMLO presionó insistentemente desde la mañana al INE para lograr el registro y perdonar la “pequeña falta” que conducía a la negativa. Cuando el asunto pasó al TEPJF, el presidente llegó a proponer que esta instancia jurisdiccional hiciera una encuesta telefónica para resolver el problema. Antes de la resolución del TEPJF, AMLO atacó una y otra vez al INE con los argumentos que ha repetido los últimos dos años y medio: es una institución muy cara, sus consejeros ganan más que él y a lo largo de su historia ha solapado los fraudes electorales. Incluso llegó a consentir, o por lo menos no reprobó, las amenazas de violencia física contra los consejeros del INE que profería Salgado Macedonio (llamaba a sus seguidores a ir a buscarlos en sus “mansiones”, especialmente a Lorenzo Córdova, al que llamó “cabroncito”). Cuando el tribunal le dio la razón al INE en negar el registro a los dos aspirantes, el discurso presidencial se radicalizó y atacó por igual a la autoridad administrativa y a la jurisdiccional,

acusándolas de ser enemigas de la democracia y de existir precisamente para avalar los fraudes. A este tema se sumó la sentencia del TEPJF que avalaba el acuerdo del INE que pretendía moderar la sobrerrepresentación del partido mayoritario en la cámara de diputados (Acuerdo INE/CG193/2021, del 19 de marzo de 2021), que a los ojos de los dirigentes de Morena y de AMLO mismo era una maniobra para arrebatarse la mayoría a la coalición gobernante. El corolario de los ataques presidenciales fue la amenaza de promover una nueva reforma electoral para transformar sustancialmente a esas instituciones, como parte de lo cual el INE se integraría al Poder Judicial. El frustrado aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, habló de “desaparecer” al INE, llegando al extremo de vaticinar que las instalaciones de la institución se convertirían en un gran hospital para el pueblo.

No se trataba solamente de un exabrupto presidencial. Se trataba ante todo de una amenaza: si el INE y el TEPJF seguían resolviendo los asuntos electorales en contra de los designios presidenciales, es decir, si seguían haciendo enojar al presidente, entonces vendría una reforma electoral que los arrasaría. Nunca se había visto en México un ataque presidencial de tal magnitud contra las instituciones electorales construidas durante las tres últimas décadas, precisamente las instituciones que llegaron a ser consideradas los baluartes de la transición mexicana a la democracia. En el discurso presidencial tal proceso de democratización solamente fue un espejismo porque se produjo en el contexto del neoliberalismo, el periodo más negro de la historia del país. Para el presidente, la democracia apenas nació en 2018 con su triunfo electoral y por tanto a él le corresponde construir una “verdadera democracia,” lo que sea que eso signifique.

Las numerosas impugnaciones contra la intervención evidente del presidente en el proceso electoral siguieron un camino lento y sinuoso. Un caso emblemático es el de la impugnación de la conferencia mañanera del 23 de diciembre de 2020, iniciada por el PRD ante la Comisión de quejas y denuncias del INE, ante cuya resolución el partido se inconformó ante la Sala Regional Especializada (SRE) del TEPJF, la que consideró que no existía infracción alguna. De nuevo el partido impugnó esta resolución y el asunto llegó a la Sala Superior (SS), la que revocó la sentencia de la SRE por falta de exhaustividad y le ordenó analizar de nuevo el tema y elaborar una nueva sentencia. Pero de nuevo la SRE resolvió la inexistencia de infracciones en la conducta presidencial, por lo que la Sala Superior resolvió por mayoría el

14 de julio, más de seis meses después de las polémicas declaraciones, que el presidente López Obrador sí vulneró el principio de imparcialidad en virtud de que las expresiones impugnadas constituyeron propaganda negativa hacia ciertos partidos (*El Financiero* y *El Universal*, 14 de julio de 2021). Por alguna extraña razón –tal vez porque el proyecto del Magistrado Presidente fue derrotado- no se publicó Boletín de la sesión de ese día).

A pesar de la resolución tomada por mayoría, se volvió a regresar el expediente a la SRE para que individualizara la sanción correspondiente y estableciera medidas de no repetición, a pesar de que la jornada electoral había transcurrido hacía más de un mes, lo que dicha sala realizó cinco días después, el 19 de julio. El problema es que las medidas de no repetición ya no podían impactar sobre el comportamiento presidencial durante la etapa del proceso electoral previa a la jornada electoral, porque ésta ya había tenido lugar cuarenta y tres días antes. Para compensar lo anterior, la resolución estableció que el Presidente, por medio de su consejería jurídica, debería ajustar los contenidos de sus mensajes a las excepciones constitucionales a la propaganda electoral, durante el periodo de difusión de la consulta popular (del 15 de julio al primero de agosto), la revocación del mandato (a la que considera un hecho inevitable, a pesar de que debe ser solicitada por la ciudadanía) y a los futuros procesos electorales. Además de lo anterior, se ordenó a la Coordinación de comunicación social de la Presidencia editar las partes impugnadas de la conferencia del 23 de diciembre, así como también se ordenó al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) el retiro del material audiovisual de la disposición de la señal satelital que corresponde a la conferencia. Todo lo anterior ocurría más de medio año después de las declaraciones impugnadas (TEPJF, Boletín del 19 de julio de 2021).

Este ejemplo se repitió a lo largo de todo el proceso electoral, lo que explica que el presidente AMLO se sintiera intocable por cualquier autoridad electoral, por más graves que fueran las violaciones legales y constitucionales que cometiera durante el proceso y las campañas electorales, por lo que estas violaciones continuaron hasta la víspera de la jornada electoral.

Antes de la jornada electoral del 6 de junio, el 28 de mayo la Comisión de Quejas y Denuncias (CQyD) del INE ordenó nuevamente al presidente AMLO abstenerse de difundir propaganda gubernamental, como resultado de su análisis de 36 conferencias mañanera, de las que encontró contenido violatorio de la veda electoral en 29 de ellas, ya fueran expresiones de

propaganda gubernamental o manifestaciones político-electorales. Este análisis se derivó de dos denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del presidente por las expresiones que el servidor realizó durante sus conferencias matutinas del 5 de abril al 18 de mayo, y de los días 20 y 26 de mayo.

La CQyD del INE planteó que “De un análisis minucioso al contenido de las conferencias matutinas denunciadas se evidenció que, al menos durante el periodo del 5 de abril al 26 de mayo, el Titular del Poder Ejecutivo se pronunció de manera reiterada y constante sobre temas y aspectos prohibidos por la Constitución”. En consecuencia, ordenó al presidente abstenerse de difundir “logros de gobierno, incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias, obra pública, así como emitir cualquier tipo de manifestación que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía” (INE, 28/Mayo/2021).

Ya después de la jornada electoral, el 30 de junio la Sala Superior del TEPJF resolvió que el discurso presidencial del 30 de marzo en el evento “Primeros 100 días del Tercer año de Gobierno” sí constituyó propaganda gubernamental personalizada en periodo prohibido, debido a que para esa fecha ya se encontraban en la etapa de campañas electorales Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora (TEPJF, 30/Junio/2021). Pero fue hasta el 5 de agosto que la Sala Especializada determinó las sanciones al vocero presidencial, al titular de CEPROPIE, al secretario particular del presidente y al titular del área de administración y finanzas de la secretaría particular. Para el presidente AMLO, por supuesto, ninguna sanción, solamente exhortos (TEPJF, 5/Agosto/2021).

El día primero de julio la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que el presidente AMLO afectó la equidad en el proceso electoral al apoyar a la candidata a gobernadora de Morena en San Luis Potosí y criticar al candidato de la alianza PRI-PRD en Nuevo León supuestamente por comprar votos con tarjetas, declaraciones que ocurrieron los días 5, 6, 7 y 11 de abril. Pero la consecuencia de esas violaciones a las condiciones de equidad era solamente hacer un “llamamiento al Ejecutivo Federal por conducto de su Consejería Jurídica, para que utilice adecuadamente los recursos públicos que tiene a su alcance” (TEPJF, 1/Julio/2021). El consejero jurídico y los otros funcionarios de la presidencia impugnaron esta resolución, por lo que el asunto pasó a la Sala Superior, la cual confirmó el

13 de agosto (más de dos meses después de la jornada electoral) la resolución de la SRE, es decir que el presidente sí violó las condiciones de equidad de las elecciones de San Luis y Nuevo León.

El 7 de julio la Sala Superior resolvió que en su conferencia mañanera del 9 de abril, el presidente incurrió en actos de propaganda gubernamental, violando con ello la veda electoral del periodo de campañas, pero la responsabilidad se achacó al vocero presidencial y al titular de CEPROPIE.

Este breve recuento muestra que el presidente AMLO es seguramente el más impugnado por intervenir indebidamente en el proceso electoral, pero al mismo tiempo que es el más impune. La única sanción que recibió fue el exhorto reiterado a moderar su comportamiento, lo que significa que sus violaciones legales y constitucionales permanecen impunes. Es difícil imaginar mayor incentivo para que presidente siga violando la ley.

Los resultados electorales y el presidente

AMLO se esforzó por convertirse en el centro de todo el proceso y las campañas electorales, por demostrar que él y sólo él realmente era el jefe de la campaña de su partido Morena y sus aliados, así como por plantear que estaba en juego el avance de su transformación frente a las fuerzas oscuras de la reacción y el conservadurismo, por lo cual el resultado en el nivel federal fue más bien modesto y hasta cierto punto decepcionante, no así en lo local. Tal vez por eso AMLO pasó varias semanas hablando de los resultados en sus conferencias mañaneras, en una verdadera terapia para autoconvencerse de que en realidad acababa de vivir una gran victoria.

En la elección federal el partido del presidente obtuvo el 34.1% de la votación total, tres puntos porcentuales menos que en 2018, en tanto que sus aliados del PVEM alcanzaron el 5.4% y del PT el 3.2%. En total, la coalición gobiernista sumó 42.7% de la votación, por debajo del 45.4% de tres años antes (cuando el tercer aliado fue el PES, a diferencia de ahora que fue el PVEM). No es un mal resultado para una coalición gobernante, considerando que en el pasado reciente el partido del presidente disminuía notablemente su votación en la elección intermedia, pero tomando en cuenta que el presidente esperaba que las bondades de

su “cuarta transformación” y sus políticas sociales se tradujeran en un apoyo masivo, resulta una disminución relevante. Este resultado significa que un 57.3% del electorado no votó por la coalición gubernamental, del cual el 39.7 votó por la coalición PAN-PRI-PRD, 7% por MC, otro 7% por los tres partidos nuevos que perdieron el registro y 3.4% anuló su voto.

Elección de Diputados federales en 2021

Partido o Coalición	Votación Diputados	Votación %	Diputados M. R.	Diputados R. P.	Total Diputados	Diputados %
JHH	21'025,742	42.78	183	95	278	55.6
Morena	16'759,917	34.11	122	76	198	39.6
PVEM	2'670,997	5.43	31	12	43	8.6
PT	1'594,828	3.24	30	7	37	7.4
VaxMéx.	19'477,887	39.63	110	89	199	39.8
PAN	8'969,288	18.25	73	41	114	22.8
PRI	8'715,899	17.73	30	40	70	14.0
PRD	1'792,700	3.65	7	8	15	3.0
MC	3'449,982	7.02	7	16	23	4.6
PES	1'352,544	2.75	--	--	--	--
RSP	868,515	1.77	--	--	--	--
FxM	1'217,084	2.48	--	--	--	--
Cand. Indep.	44,311	0.09	--	--	--	--
No Reg.	41,933	0.08	--	--	--	--
Nulos	1'673,322	3.40	--	--	--	--
Total	49'151,320	100.00	300	200	500	100.0
LNE	93'328,771					
Participación		52.66				

Fuente: Instituto Nacional Electoral.

JHH: Coalición Juntos Hacemos Historia, Integrada por Morena, PT y PVEM

VaxMex: Coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD

Por supuesto, con esta votación la coalición gobernante conserva la mayoría absoluta de la cámara baja, pero esta muy lejos de la mayoría calificada que alcanzó por diversos medios en la legislatura que está por concluir. Después de la asignación de diputados de representación proporcional, Morena alcanza 198 diputados: 122 de mayoría (a los que hay que restar tres por resolución del TEPJF del 14 de agosto de 2021) y 76 de representación proporcional, lo que representa el 39.6% de la cámara. Hay que sumar los 37 del PT (30 de M. R. y 7 de R. P.) y los 43 del PVEM (31 de M. R. y 12 de R. P.), lo que representa el 55.6%. No está de más recordar que el PVEM en el pasado inmediato fue aliado del PRI (y antes lo había sido del PAN), por lo que seguramente ahora elevará el costo de su lealtad. Si

el PVEM no apoyara al bloque gobiernista, Morena y PT solamente representarían el 47% de la cámara baja, es decir, menos de la mayoría absoluta.

En su conferencia mañanera del 7 de junio, un día después de la jornada electoral, AMLO trató de dictar cátedra sobre los conceptos de mayoría simple, absoluta y relativa, pero se enredó de tal forma que simplemente hizo el ridículo al decir que el concepto de mayoría absoluta no existía legalmente, que solamente hay mayoría simple y calificada y remato diciendo: “no hemos tenido nunca la mayoría absoluta, tan es así, que yo obtuve 53 por ciento de los votos y eso no puede ser mayoría absoluta.” Al hacer cuentas sobre los triunfos de la coalición Morena-PT-PVEM, dijo que tenía “183 de 300 -ah, más uno- de 300, 61 por ciento. Para tener mayoría calificada es 66. Entonces, esto posiblemente sea más de lo que teníamos,” con lo que cometía el error de hacer sus cálculos con relación solamente a las 300 diputaciones de mayoría relativa, sin considerar los 200 de representación proporcional (AMLO, 7/Junio/2021). En realidad, es menos de lo que tenía su coalición, que salió de la elección de 2018 con 308 diputados (61.6%) y después de absorber a varios legisladores del PRD y de integrar al PVEM a su alianza llegó a 334, es decir, el 66.8%, la mayoría calificada. Entonces el saldo final en esta materia es que la coalición gobernante sí conserva su mayoría absoluta pero queda a diez puntos de la mayoría absoluta, que es de vital importancia para las reformas constitucionales y para el nombramiento de consejeros electorales.

En sus mañaneras de las semanas siguientes a la jornada electoral y en el evento del primero de julio, al que definió como “Tercer aniversario del triunfo histórico democrático del pueblo mexicano”, AMLO hizo un balance de la elección no como un jefe de Estado sino como verdadero jefe de campaña que fue. Planteó que las elecciones fueron unas de las más “numerosas y competidas...consolidando, al mismo tiempo,...el sistema y el método democrático.” Festejó que no se usó el presupuesto público para comprar votos (a pesar de la acción de los servidores de la Nación), que no hubo masacres ni violencia (a pesar del número de atentados y asesinatos de candidatos) y que no hubo “elecciones de estado” (a pesar de su intervención permanente y descarada en el proceso electoral) (AMLO, 1/Julio/2021).

A pesar de reconocer que organizativamente las elecciones fueron un éxito (se abrió el 99.98% de las casillas y participó el 52 de la ciudadanía), no hizo el más mínimo reconocimiento a la labor del INE, su blanco permanente de ataques durante el proceso electoral. Al momento de hablar de los resultados, se refirió a la oposición como “bloque conservador”, “grupo reaccionario”, “nuestros adversarios”, representantes del “antiguo régimen”, que incluso recurrieron a la “guerra sucia”, “conservadores clasistas, racistas e hipócritas”. Pero eso sí, al mismo tiempo que insultaba así a la oposición, “reconoce” su derecho a actuar en política. En contraste con sus ataques a la oposición, AMLO extendió su agradecimiento al crimen organizado por “portarse bien” durante la jornada electoral, mejor que los delincuentes de “cuello blanco” (AMLO, 7/Junio/2021).

Al mismo tiempo, no deja de festejar que la coalición encabezada por su partido tendrá una bancada mayoritaria, lo que le permitirá a su gobierno mantener la política favorable a los pobres (“a los que aborrecen los conservadores”). Según el balance presidencial, a los conservadores “se les ganó en buena lid, porque el pueblo es sabio” (AMLO, 7/Junio/2021). En lugar del balance que un jefe de Estado debería hacer, llamando a trabajar unidos después de la confrontación electoral, AMLO atizó la polarización permanente, como ha hecho a lo largo de todo su gobierno.

En el nivel de la lucha por las gubernaturas, a la coalición encabezada por Morena le fue bastante bien porque ganó 11 de 15 posiciones en juego (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas) a las que se puede sumar una más, la de San Luis Potosí, que fue ganada por la coalición PVEM-PT con un candidato muy cuestionado por sus antecedentes judiciales. Con esto, el partido del presidente y sus aliados controlan ya 18 gubernaturas, lo que les da una gran ventaja territorial para la elección de 2024. En esta zona de la política nacional Morena tuvo un gran avance neto. En contraste, el PRI perdió las ocho gubernaturas que tenía en juego, el PRD la única que conservaba (Michoacán), el PAN perdió dos (BCS y Nayarit) y logró retener dos (Chihuahua y Querétaro) y MC dio la sorpresa al ganar una gubernatura (Nuevo León).

En las elecciones de diputaciones locales Morena y sus aliados ganaron la mayoría en 18 de las 30 legislaturas locales que estuvieron en disputa (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz), pero la perdieron en otros cuatro (Durango, Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí). Por lo tanto, la coalición gubernamental conserva este requisito de las reformas constitucionales (mayoría de legislaturas locales) pero no tiene el principal (mayoría calificada en las dos cámaras).

Algo que lastimó profundamente a AMLO fue la caída de la votación morenista en la Ciudad de México y en algunos de los municipios conurbados del Estado de México. En efecto, en la capital la alianza PAN-PRI-PRD ganó nueve jefaturas delegacionales, mientras Morena y sus aliados solamente ganaron siete. La coalición gubernamental mantiene la mayoría absoluta en la legislatura local (34 de 66, exactamente la mitad más uno), mientras la coalición opositora PAN-PRI-PRD alcanzó 31 y MC solamente uno. Tanto afectó este resultado a AMLO que las semanas siguientes insistió en que el avance opositor en la capital del país se debió a que las clases medias fueron manipuladas por la prensa conservadora, lo que se ha facilitado porque ese sector social se hizo muy egoísta y “aspiracionista” durante el periodo neoliberal. Durante varias semanas AMLO desató una ofensiva contra la clase media del área metropolitana del Valle de México sin precedentes. La supuesta explicación de que la clase media fue manipulada por “un manejo informativo perverso, tendencioso, calumnioso, inmoral y tóxico”, por ejemplo con el tema de la tragedia de la Línea 12 del Metro, que constituyó una supuesta “guerra sucia” contra su gobierno, se acompañó del planteamiento de que “la gente humilde, trabajadora, buena” entiende que “esas cosas” suceden porque son “buenos cristianos” (AMLO, 8/Junio/2021). El problema es que tal “explicación” pasa por alto que fue precisamente durante el periodo neoliberal cuando el PRD ganó la Jefatura de Gobierno (a partir de 1997), que él mismo ocupó de 2000 a 2005, y estableció su dominio sobre las jefaturas delegacionales (hoy Alcaldías) y la Asamblea Legislativa (hoy Legislatura de la Ciudad de México), a pesar o tal vez gracias a esas clases medias.

La consulta popular y la radicalización autoritaria

A partir de los resultados de la elección intermedia el presidente López Obrador inició un camino de radicalización de su estrategia para desarrollar su movimiento de “transformación”, lo que en los hechos ha conducido a una acentuación de las tendencias autoritarias del actuar presidencial.

El retroceso de su partido y sus aliados tanto en la cámara de diputados como en la Ciudad de México y el Estado de México fue atribuido a la traición de la clase media, a la que AMLO ha fustigado incansablemente desde entonces. Como nunca antes, olvidando que los triunfos de la izquierda en la Ciudad de México desde la década del noventa se debieron en buena medida a una clase media ilustrada y progresista, después de la elección de 2021 se ha dedicado a atacar a ese sector social: “aspiracionistas”, se dejan manipular por los medios de comunicación, en el pasado apoyaron el golpe contra Madero (sí, hace más de cien años), en otros países llegaron a apoyar a Hitler y a Pinochet, fueron algunas de las barbaridades con las que desde la tribuna presidencial se fustigó a la clase media que se atrevió a retirarle su voto. En alguna ocasión llegó a decir que el comportamiento egoísta de la clase media contrastaba con la actitud agradecida de los pobres, que sí son “buenos cristianos”.

Como resultado de la elección, Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada en la cámara de diputados, la mayoría en las alcaldías de la capital, la mayoría abrumadora en la legislatura de la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México que había ganado tres años atrás.

Pero, al mismo tiempo, el triunfo en once de las quince gubernaturas en juego le permitió controlar los gobiernos de la mitad del país, lo que le da una plataforma inmejorable para preparar la elección presidencial de 2024. Aun no se disipaba el humo de la batalla electoral cuando el país se metió en una consulta popular con una pregunta sin sentido que tenía que ver con esclarecer decisiones de actores políticos del pasado, que AMLO y sus seguidores llamaron la “consulta para enjuiciar a los expresidentes del periodo neoliberal” (como era su intención original). La consulta se realizó el primero de agosto de 2021 y resultó un completo fracaso porque apenas logró que el 7% de la ciudadanía acudiera a votar a pesar de la promoción permanente que el presidente y su partido hicieron por todos los medios. Evidentemente AMLO y su partido culparon al INE del fracaso de la consulta.

Durante el proceso electoral y el proceso de consulta popular AMLO se inmiscuyó de todas las formas posibles, violando la constitución y las leyes. Apoyó a su partido y denostó a candidatos opositores sin límite alguno. El INE y el TEPJF se cansaron de llamarle la atención y de ordenarle respetar la ley y abstenerse de inmiscuirse en las cuestiones electorales, pero él siguió como si nada. Si ya antes del proceso electoral el presidente atacaba esporádicamente a las autoridades electorales, a partir de la elección arreció su ofensiva y amenazó permanentemente con impulsar una reforma electoral para “barrer” con consejeros y magistrados electorales que se atrevían a desafiar su autoridad. La apuesta era empujar esa reforma inmediatamente después de la elección, pero la nueva integración de la cámara de diputados les arrojó una cubeta de agua helada en la cabeza porque a partir del primero de septiembre ya no tuvo la mayoría calificada de la que disfrutó durante la primera mitad del sexenio, y la reforma electoral que AMLO quería implicaba una reforma constitucional. Además, el presidente y su partido culparon a los consejeros del INE y a los magistrados del TEPJF de la reducción de su fuerza en la cámara baja (debido al acuerdo del Consejo General que procuró disminuir la sobrerrepresentación que se produjo tres años atrás, acuerdo que fue avalado por el TEPJF), lo que acentuó el odio presidencial hacia esas instituciones electorales, a las que acusa de ser una herencia del periodo neoliberal y de ser representantes de sus adversarios los conservadores.

En sus tres primeros años de gobierno, AMLO desarrolló una ofensiva permanente contra los medios de comunicación críticos, contra la oposición, contra los organismos autónomos, contra los fideicomisos, contra los jueces que conceden amparos a quienes se oponen a sus obras, contra los científicos, etcétera, etcétera. La vocación autoritaria del presidente se ha desplegado contra toda institución o actor político que se oponga, que lo critique o que retrase sus obras y su “cuarta transformación”. Hay que insistir en este punto: estamos hablando de una vocación autoritaria de AMLO, de su idea de encarnar un profundo proceso de transformación, que solamente él entiende, de su obsesión por alcanzar la unanimidad, pero el régimen político aún tiene algunas salvaguardas democráticas que le hacen frente. Los medios de comunicación críticos, tanto en la prensa escrita como en radio y televisión, algunos sitios de internet y las benditas redes sociales, constituyen espacios donde la pluralidad y la crítica fluyen. Por eso las mañaneras se han convertido en espacios de ataque permanente contra medios y periodistas críticos. El supuesto “derecho de réplica”

del presidente en realidad es un derecho de ataque porque nunca aclara las informaciones que le parecen incorrectas, sino más bien ataca, insulta y trata de desacreditar a los medios incómodos. Nunca habíamos visto a un presidente que atacara a periódicos y periodistas en lo individual, con nombre y apellido, como lo vemos ahora.

Por supuesto, las otras salvaguardas del régimen democrático que resisten la tendencia autoritaria presidencial son los partidos de oposición, el Poder Judicial, el INAI, el INE y el TEPJF, todas ellas bajo el fuego permanente de la furia presidencial. Los partidos opositores lograron pasar la prueba de la elección intermedia, pero para ello debieron unirse y algunos de ellos jamás hubieran imaginado hacer alianza con partidos a los que consideraban enemigos mortales. El Poder Judicial ha estado bajo el asedio presidencial permanente, lo mismo que las autoridades electorales y el INAI. Y este asedio seguirá hasta el último día de este sexenio y apenas vamos en el cuarto año.

La revocación de mandato

El primer ejercicio de revocación de mandato que se realizó en nuestro país concluyó con resultados muy por debajo de lo esperado por su principal promotor, el presidente López Obrador. Él esperaba que el 10 de abril se produjera una auténtica avalancha humana sobre las urnas y que el pueblo le demostrara su apoyo con muchos votos, pero en lugar de eso, y a pesar del gran esfuerzo de movilización gubernamental, para lo cual violaron la ley deliberadamente, y del gran gasto de su partido, por medio de supuestas organizaciones ciudadanas que “espontáneamente” desembolsaron millones de pesos en diversas formas de propaganda, la afluencia ciudadana apenas llegó a 17.78% de la lista nominal de electores, algo así como 16 millones y medio de votos, de los cuales poco más de 15 millones fueron a favor de la opción favorable a la permanencia de AMLO en la presidencia.

El Instituto Nacional Electoral cumplió en la organización de la consulta revocatoria, como ya es costumbre desde su fundación y aún antes, desde su antecedente el IFE. No está de más recordar que desde un principio el INE tuvo que vencer muchos obstáculos, desde la negativa gubernamental del presupuesto necesario hasta los ataques reiterados desde el gobierno y su partido, que incluso llegaron al extremo de una denuncia penal contra integrantes del Consejo General.

Desde un principio el presidente de la república y varios funcionarios gubernamentales de alto rango hicieron caso omiso de las reglas legales en torno al proceso de revocación, pues se empeñaron en seguir difundiendo propaganda gubernamental y en llamar a la participación ciudadana en la revocación, lo que les está expresamente prohibido por la ley y la Constitución. Ante esa situación el INE se vio obligado a hacer llamamientos reiterados a los funcionarios públicos para que respetaran la ley, que en su mayoría fueron confirmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Frente a esos llamados, la respuesta gubernamental fue reincidir en la violación de la ley y en amenazar con la realización de una reforma electoral que modificaría sustancialmente la integración y las atribuciones de las autoridades electorales. AMLO repitió los mismos planteamientos del año anterior cada vez que las autoridades electorales señalaban sus violaciones a la ley, usando la idea de una reforma electoral como una amenaza contra ellas, no como parte de un esfuerzo para mejorar las reglas que rigen los comicios. El argumento es muy sencillo: o encubren mis violaciones a la ley o la reforma los barrerá.

A pesar de todo, el INE continuó con sus tareas de organización de la revocación, en estricto cumplimiento de lo que le ordenan la Constitución y las leyes. El resultado está a la vista. A pesar de la inevitable reducción del número de casillas debido a la restricción presupuestal, la preparación y la jornada electoral fueron un éxito organizativo y la información fluyó correctamente desde el cierre de las casillas y los cómputos distritales. La misma noche del día 10 de abril el conteo rápido adelantó la tendencia general y al día siguiente ya se tenía el panorama completo.

A pesar de la baja participación ciudadana, AMLO convirtió el resultado en un claro indicador de su popularidad, llegando a comparar los datos de la consulta con las elecciones de 2006. Con las de 2018 la comparación se limitó a los votos de los derrotados, a los que los 15 millones de hoy rebasan fácilmente. Pero por supuesto no dijo que ahora alcanzó la mitad de los votos con los que ganó la presidencia. Y mucho menos reconoció todas las violaciones cometidas por él y los funcionarios gubernamentales de su partido para alcanzar esos número

El dirigente de su partido llegó a decir que si se hubieran instalado todas las casillas previstas en un principio (y que debían corresponder a las instaladas el año pasado), el resultado

favorable a la permanencia de AMLO en la presidencia se hubiera triplicado, es decir habrían votado 45 millones de ciudadanos. Después de decir esto, el dirigente de Morena remató con “tengan para que aprendan”, expresión que AMLO repite con frecuencia.

Es necesario desprender de esta experiencia las lecciones pertinentes. En primer lugar, se debe considerar la necesidad de establecer claramente en la ley que la consulta de revocación no es un concurso de popularidad que el propio presidente y sus seguidores solicitan. Hay que recordar que la figura se llama “revocación de mandato” y que la propia Constitución establece que la pueden solicitar los ciudadanos que consideren que es necesario poner fin al mandato de un presidente por “pérdida de la confianza”. En el proceso que concluyó hace unas semanas en México más bien estuvimos frente a un proceso de “ratificación de mandato” pues los supuestos grupos ciudadanos que la solicitaron tenían evidentes vinculaciones con el partido gobernante y disfrutaron de un financiamiento ilimitado, tanto para recolectar las firmas como para inundar el país de publicidad que seguramente costó mucho dinero (espectaculares, carteles, mantas, etc.) que llamaba a votar para que siguiera el presidente. En realidad, nunca hubo un grupo ciudadano importante que llamara a una eventual revocación del presidente. El Frente Nacional Anti AMLO, que llamó a votar por la revocación, quedó reducido a lo más mínimo frente a la publicidad de los grupos que llamaban a votar para que siguiera AMLO. Además, durante los meses previos a la consulta revocatoria los más interesados en promover la participación ciudadana fueron el propio presidente, sus funcionarios gubernamentales de distintos niveles, legisladores y su propio partido y sus partidos aliados.

Con total impunidad transcurrieron la participación permanente del presidente AMLO y de funcionarios de su gobierno en tareas de difusión y promoción de la consulta revocatoria, así como de la difusión de propaganda gubernamental que explícitamente está prohibida por la veda electoral. Una y otra vez, el presidente violó la ley por más medidas cautelares que el INE aprobara y el TEPJ avalara. El colmo fue la gira que la semana anterior a la jornada electoral realizó el secretario de gobernación, en compañía de otros funcionarios gubernamentales y del dirigente del partido Morena, para llamar a la participación en la revocación, gira que realizaron en un avión de la Guardia Nacional y con la participación de su titular. En esa ola de impunidad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo lo propio

con un mitin de cierre de campaña que también contó con la participación de funcionarios locales y federales. La exhibición de impunidad de los funcionarios gubernamentales llegó al extremo con el planteamiento del secretario de gobernación que llamó a no hacerle caso al INE porque, según él, sus consejeros ya van de salida y los veremos irse “con la cola entre las patas”.

La iniciativa presidencial sobre organización de las elecciones

El presidente López Obrador presentó el 28 de abril su iniciativa, que en realidad fue elaborada por dos funcionarios de áreas alejadas del tema electoral. No está de más recordar que en el pasado, estas iniciativas procedían de la secretaría de Gobernación, pero, fiel a su propio estilo, ahora el presidente le encargó esta tarea a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Horacio Duarte, titular de las aduanas, pero ambos connotados militantes del partido gobernante.

A pesar de que la iniciativa abarca varios temas de la materia electoral, su núcleo es la reestructuración completa de la organización de las elecciones y de la resolución de las controversias jurisdiccionales en la materia. Las diversas propuestas en torno a disminuir el financiamiento a los partidos políticos, a cambiar la forma de elegir a diputados y senadores, así como reducir su número, todo ello con el supuesto objetivo de ahorrar recursos, esas diversas propuestas en realidad son simples distractores para hacer atractiva la iniciativa presidencial a los ojos de la ciudadanía. El verdadero interés presidencial es barrer o arrasar, como el propio AMLO lo dijo desde hace más de un año, con el actual INE, con los OPLEs y con el actual TEPJF, y sustituirlos por una nueva institucionalidad que pueda ser controlada desde el principio por el propio presidente y su partido.

Desde el inicio de su gobierno y particularmente durante el proceso electoral de 2021, la consulta popular y la revocación de mandato, el presidente ha atacado al INE y lo ha culpado de los supuestos fraudes del pasado reciente (pero nunca recuerda el fraude de 1988, en el que su buen amigo y funcionario estrella Manuel Bartlett tuvo un papel protagónico) y de tener un ánimo contrario a él y a su gobierno. En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se dice: “Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los grupos económicos. En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado, por su falta de apego a los principios

de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso de revocación de mandato”. A lo cual se añade el supuesto elevado costo de estas instituciones electorales, que tiene su máxima expresión en los sueldos de sus funcionarios, como AMLO recuerda frecuentemente.

Por supuesto, que ni la exposición de motivos ni el propio AMLO en sus conferencias diarias explican cómo es posible que esas instituciones no objetivas, no independientes y no imparciales, hayan podido organizar las elecciones de 2018, de las cuales emergió el actual gobierno, y cómo se han podido realizar las elecciones locales que han conducido a que el partido del presidente y sus aliados tengan hoy la mayoría absoluta de gubernaturas y de congresos locales. Por el contrario, el propio presidente ha atribuido su triunfo de 2018 a que el presidente Peña Nieto no metió las manos, por lo cual le ha agradecido públicamente varias veces.

La iniciativa presidencial propone desaparecer al INE y sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (menos mal que no le añade “del Bienestar”), que absorbería tanto las actuales atribuciones del INE como las de los OPLEs, los cuales entonces desaparecerían. De hecho, la iniciativa desaparecería también la división del país en distritos, debido a que propone que los diputados sean electos por medio de listas de candidatos en cada entidad federativa. Por lo tanto, el INEC sería la institución única en materia de organización de elecciones tanto locales como federales.

Por el lado de la institución jurisdiccional, la iniciativa propone mantener y fortalecer al actual TEPJF, que absorbería las atribuciones de los tribunales locales, los cuales por tanto desaparecerían. Con esto, el TEPJF sería la autoridad jurisdiccional única en el país.

Con estas dos medidas, de acuerdo a la iniciativa, se produciría un gran ahorro de recursos, que es un objetivo que corre a lo largo de toda la propuesta. Pero también se produciría una total centralización de las tareas de organización de las elecciones y de resolución de controversias en torno a ellas.

Veamos ahora el método que se propone para nombrar a los integrantes de sus órganos de dirección. Los consejeros del INEC y los magistrados del TEPJF serían electos por voto ciudadano de entre las propuestas que harían los tres poderes. Cada poder propondría 20 candidatos a consejeros y 10 a magistrados, los cuales harían campañas electorales por todo el país para convencer a la ciudadanía. A pesar de que la iniciativa plantea que estaría prohibido que los partidos hicieran campaña a favor o en contra de algún candidato, resulta obvio que los candidatos favoritos del presidente y su partido recibirían todos los apoyos para ganar. José Woldenberg ha planteado que un escenario extremo, bastante probable, es que todos los ganadores pudieran provenir de las propuestas presidenciales, lo que le daría todo el control del INEC y del TEPJF. Otro escenario posible es que ganara una combinación de las propuestas del presidente y las de su coalición gobernante. El mito presidencial de que consejeros y magistrados provengan del voto popular en realidad encubre el objetivo de controlar las instituciones electorales, lo que conduciría inevitablemente a un régimen autoritario.

Comentarios finales

Las elecciones de 2021 demostraron la capacidad organizativa del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). La elección de los 500 diputados federales se llevó a cabo puntualmente, bajo la organización del INE, en los 300 distritos uninominales. De la misma forma, las elecciones de las 15 gubernaturas y los cientos de cargos de diputados locales y autoridades municipales, se realizaron bajo la organización coordinada de los OPLEs y el INE.

Sin lugar a dudas la elección fue un éxito organizativo, lo que demuestra que el modelo mexicano de organización electoral, clave para el proceso de democratización que vivimos durante las recientes tres décadas, funciona adecuadamente. El mérito de ello no le corresponde solamente a las y los cientos de servidores públicos con que cuenta el INE, cuya experiencia proviene desde la época del IFE. El mérito le corresponde también a la ciudadanía mexicana que participa activamente en la organización de las etapas del proceso electoral, como consejeros distritales, como consejeros locales, como capacitadores, como supervisores, como funcionarios de casilla, como observadores electorales, y, por supuesto, los millones de ciudadanas y ciudadanos que acudieron a las urnas el domingo 6 de junio en

una participación de 52.7%, récord para una elección intermedia. Los conteos rápidos, los programas de resultados preliminares y los cómputos distritales permitieron tener la información fundamental a tiempo.

A pesar del éxito organizativo de las elecciones, el INE y los OPLEs, pero el primero con mayor intensidad, se vieron sometidos a una ofensiva en toda la línea por parte del presidente de la república y de su partido Morena. No se trató solamente de críticas a su desempeño, sino de ataques y amenazas. El presidente y los dirigentes de Morena enfocaron sus baterías contra el INE, al cual acusaron de excederse en sus atribuciones y actuar en contra de su partido por designios de los conservadores.

Además de los ataques y amenazas a las autoridades electorales, el presidente AMLO intervino constantemente en el proceso electoral y en la etapa de las campañas, tanto haciendo abiertamente propaganda de los supuestos logros de su gobierno, como haciendo declaraciones casi todos los días en materia electoral. De hecho, el presidente se convirtió abiertamente en el coordinador y vocero de la campaña de la coalición encabezada por Morena. Las recientes sentencias del Tribunal Electoral han confirmado, aunque de manera tardía, esa abierta intromisión presidencial en las campañas electorales.

Después de la raquítica asistencia ciudadana a la consulta popular y a la revocación de mandato, AMLO volvió a insistir en la necesidad de una reforma electoral. El 16 de agosto, después de que la Sala Superior del TEPJF le quitara tres diputaciones de mayoría a la coalición gubernamental, planteó la necesidad de una reforma electoral que proceda a una “renovación tajante” de los integrantes del INE y del TEPJF, supuestamente porque “no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud...no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país” (AMLO, 16/Agosto/2021).

Finalmente, el 28 de abril AMLO presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, cuyo núcleo es la reestructuración del sistema de organización de las elecciones, por medio de la transformación del INE en INEC, la elección por voto popular de sus consejeros y de los magistrados del TEPJF, así como de la desaparición de los OPLEs y los tribunales locales. El objetivo presidencial es controlar la organización de la elecciones y de

la resolución de las controversias en la materia, como parte de la reconstrucción del presidencialismo autoritario que ha caracterizado a su gobierno.

Pero hay un pequeño problema: como resultado de la elección intermedia la coalición lópezobradorista no tiene la mayoría calificada necesaria para lograr la reforma constitucional. ¿Algún partido opositor se prestará a ayudar al gobierno a alcanzar estas mayorías?

Fuentes de consulta

Aguilar Morales, L. M. (1 de octubre de 2020). *Revisión de la Constitucionalidad de la materia de Consulta popular 1/2020*. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2020-09/Rev%20const%201-2020%20-%20PROYECTO.pdf.

Becerra Chávez, P. X. (noviembre de 2019), La agenda de la reforma electoral de la coalición gobernante. Entre la austeridad y el control. Ponencia para el *Encuentro Nacional para una Reforma Político-Electoral del Estado Mexicano*. Querétaro: Instituto Nacional Electoral-Universidad Autónoma Metropolitana.

_____ (2015), El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, en González Madrid, Miguel y A. Escamilla (Coordinadores), *El nuevo sistema político electoral mexicano en 2015* (pp. 203-232). México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa.

_____ (2018), Los partidos minoritarios en 2018, en Rosa María Mirón (coord.) *Los estados en 2018*. México: Posgrado en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Canal del Congreso, Varias notas informativas, <https://www.canaldelcongreso.gob.mx>.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf.

Diario Oficial de la Federación, varias fechas, <http://www.dof.gob.mx/>.

Hernández Estrada, R. (2019). *Servidores de la nación. La operación política del gobierno de la 4T*. México: Partido de la Revolución Democrática.

Instituto Nacional Electoral. Varios acuerdos de diversas fechas, en <https://www.ine.mx>.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf.

López Obrador, A. M. (2018), *Mensaje a la nación del Lic. Andrés Manuel López Obrador durante su Toma de Posesión como Presidente de México ante el Congreso de la Unión*. Disponible en: <https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/discurso-del-lic-andres-manuel-lopez-obrador-durante-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-183910>.

____ Conferencias mañaneras de varias fechas, en <https://www.gob.mx/presidencia/>.

López Obrador, A. M. (2020). *Carta a las y los senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión del 15 de septiembre de 2020 para solicitar la Consulta popular para juzgar a los expresidentes*. Disponible en: <https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-15-de-septiembre-de-2020?idiom=es>.

Periódico *El Universal*, notas de varias fechas, <https://www.eluniversal.com.mx/>.

Periódico *Reforma*, notas de varias fechas, <https://www.reforma.com/>.

Portal *Latinus*, notas de varias fechas, <https://latinus.us/>.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Boletines informativos de varias fechas. Disponibles en <https://www.te.gob.mx>.